



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISÉIS (26) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE  
BOGOTÁ D.C.**

Bogotá D.C., primero (1º) de abril de dos mil diecinueve (2019).

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>RADICACIÓN:</b>       | <b>11001-33-35-026-2019-00045-00</b>                              |
| <b>MEDIO DE CONTROL:</b> | <b>EJECUTIVO LABORAL</b>  |
| <b>DEMANDANTE:</b>       | <b>DORA SILENIA ROMERO BELTRÁN</b>                                |
| <b>DEMANDADO:</b>        | <b>ADMINISTRADORA COLOMBIANA<br/>DE PENSIONES - COLPENSIONES.</b> |

**ANTECEDENTES**

El abogado **JOEL DUQUE GÓMEZ**, quien actúa en nombre y representación de la señora **DORA SILENIA ROMERO BELTRÁN**, presenta demanda ejecutiva para solicitar el pago de las costas y agencias en derecho decretadas en la sentencia proferida por el Juzgado 19 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá.

Ahora bien, este despacho observa que no es posible avocar el conocimiento de la demanda presentada, de conformidad con las siguientes,

**CONSIDERACIONES**

El artículo 104 del C.P.A.C.A, señala los asuntos sobre los cuales tiene conocimiento la Jurisdicción Contencioso Administrativo, refiriéndose en el numeral 6º, específicamente a los procesos ejecutivos, preceptuando lo siguiente:

*“ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en las leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.*

*Igualmente conocerá de los siguientes procesos:*

*(...)*

**6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.”**

Negrilla fuera de texto.

Posteriormente, el artículo 156 ibídem, que regula lo relacionado con la competencia por razón del territorio, hace referencia a los ejecutivos originados en contratos estatales y a las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción.

Luego entonces, de la normatividad antes anotada se puede establecer que, la Jurisdicción Contencioso Administrativo conoce procesos ejecutivos únicamente cuando el título sobre el cual versa la obligación proviene de *“condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.”*

Ahora bien, en el caso sub lite, la parte actora pretende el pago de las costas y agencias en derecho decretadas en la sentencia proferida por el Juzgado 19 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, tal y como consta a folio 15 del plenario.

En este orden de ideas, es claro que en el presente asunto el título que se pretende ejecutar no proviene de una condena impuesta por esta jurisdicción, ni de un contrato estatal.

En este evento, el H. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se ha pronunciado manifestando que ha sido decantada la Jurisprudencia al respecto, indicándose en la misma que la competencia para conocer este tipo de asuntos corresponde a la jurisdicción ordinaria, en atención a que la contenciosa solo conoce procesos ejecutivos cuando los mismos emanan de condenas impuestas por esta misma jurisdicción y los derivados de contratos estatales.

Es así como la H. Corporación en auto fechado 3 de mayo de 2007, M.P. Dr. JORGE ALONSO FLECHAS DÍAZ dentro del expediente con Radicado No. 110010102000200700327, señaló lo siguiente:

*“En el presente caso, la base del recaudo ejecutivo no es un contrato, sino un acto administrativo el cual no es más que la manifestación del Estado, a través del cual reconoció una determinada suma de dinero a favor de la accionante, que al no ser pagada dentro del plazo establecido en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, genera automáticamente, por virtud de la ley, el pago de una indemnización moratoria.*

*Al efecto, téngase en cuenta que conforme a lo regulado en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley o de las providencias que en procesos contenciosos administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.*

*En términos de lo establecido por el legislador en los artículos 14, 16 y 488 del Código de Procedimiento Civil, la jurisdicción ordinaria es competente para conocer de todos los asuntos contenciosos en que sea parte la Nación, un departamento, un distrito especial, un municipio, un establecimiento público, una empresa industrial y comercial del Estado, o una sociedad de economía mixta.*

*En consecuencia, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, la demanda ejecutiva materia de colisión, es ajena a las regulaciones contenidas en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 7 del artículo 134B del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual el competente para conocer de la misma es la jurisdicción ordinaria en aplicación de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 del Código de Procedimiento Civil, representada en el presente caso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha Sala Civil- Familia – Laboral.”*

Por lo tanto, es claro que en el presente caso, el objeto de la Litis es el pago de las costas y agencias en derecho decretadas en la sentencia proferida por el Juzgado 19 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, para lo cual la parte actora aporta con el escrito de demanda el proveído que ordena la liquidación de las mismas<sup>1</sup>, señalando para el efecto, el valor total que debe pagar la entidad por concepto de la condena; por lo que el presente asunto no se encuentra enmarcado dentro del conocimiento ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa tal y como lo dispone el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues no se configura como tal un acto administrativo que pueda ser ejecutable ante ésta jurisdicción.

Corolario de lo anterior, es claro que este Despacho Judicial que no es la competente para conocer del presente proceso ejecutivo, pues el mismo le corresponde al **Juzgado Diecinueve (19) Laboral del Circuito Judicial de Bogotá**, al pretenderse el pago de las costas y agencias en derecho decretadas en la sentencia proferida por dicho Juzgado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 306 del Código General del Proceso<sup>2</sup>. Por lo tanto, se ordenará remitir el presente asunto al referido Juzgado.

---

<sup>1</sup> Folio 15

<sup>2</sup> **Artículo 306. Ejecución.** Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

**DISPONE**

**PRIMERO. DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA** de este despacho judicial para conocer de la demanda ejecutiva de la referencia.

**SEGUNDO. REMITIR** el presente expediente, una vez ejecutoriado este proveído, al **JUZGADO DIECINUEVE (19) LABORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, por conducto de la Oficina de Apoyo, de conformidad con las consideraciones anotadas en la parte motiva.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO**  
**JUEZ**



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD**  
**CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**  
**SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes  
la providencia anterior hoy **2 DE ABRIL DE 2019**,  
a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

  
**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA**  
**SECRETARIA**